

No. 507  
3ra. Semana  
Julio 2017  
Año: XI  
Cuarta Época

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE

# Nuestro TIEMPO

UNA PUBLICACIÓN DE NOLOGO GRUPO S.A. DE C.V.



# "SIN NOVEDAD"



Selene Hernández León  
Fundadora

Miguel Ángel Alvarado López  
Director General

Mercadotecnia y suscripciones  
Juan Manuel Hernández León

LDG. Fabiola Díaz Rosales  
OM DISEÑO

Luis Enrique Sepulveda  
Ilustración

Fotografía  
Lluvia Ácida

Direcciones electrónicas  
nuestro\_tiempo2003@hotmail.com  
nologo\_news@hotmail.com  
ventasnologo@hotmail.com

nuestrotiempotoluca.wordpress.com  
www.nuestrotiempotoluca.com.mx

### INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO

Año X  
No. 507  
Tercera Semana de Julio del 2017  
Es una publicación semanal editada por:  
Nologo Grupo, S.A. de C.V.

Avenida Eulalia Peñaloza 132,  
Col. Federal, CP 50120,  
Toluca, Estado de México.  
Tel: 197 74 23 y 2 1775 43.

Editor responsable: Miguel Ángel Alvarado López. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2013-060614490300-101, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. ISSN en Trámite. Impreso por Miguel Fermin Pulido Gómez en Metepec, Estado de México, en el Barrio de San Mateo Abajo calle Mariano Matamoros 10, CP. 52140. Tel. 232 7144. Este número se terminó de imprimir el 17 de Julio del 2017 con un tiraje de 5 mil ejemplares.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.



 @Nuestro\_Tiempo

### EN PORTADA

Crédito/ Semanario Nuestro Tiempo.

## Suscripción

FOLIO

POR UN AÑO: \$520.00 M.N  
SEIS MESES: \$260.00 M.N

FECHA DE INICIO DE SUSCRIPCIÓN:

FINAL DE SUSCRIPCIÓN: \_\_\_\_\_

A NOMBRE DE: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

CALLE: \_\_\_\_\_

COLONIA: \_\_\_\_\_

MUNICIPIO: \_\_\_\_\_

CÓDIGO POSTAL: \_\_\_\_\_

TELÉFONO: \_\_\_\_\_

SEMANARIO NUESTRO TIEMPO  
EULALIA PEÑALOZA 132, COL. FEDERAL, TOLUCA, MÉX.  
TEL.: 01722-197•74•23/ 044722•590 67 69  
Juan Manuel Hernández / Ventas

R  
E  
S  
S  
O  
D



.....  
*\* Un agente de inteligencia militar dijo a la PGR que antes de las 22:00 había sido detenido el Estrella de Oro 1531 por dos patrullas municipales, la 028 y la 024, frente al Palacio de Justicia. Al final se identificarían hasta seis patrullas participantes en esa agresión. Todos los jóvenes que viajaban en la unidad fueron desaparecidos. Según el chofer del autobús, una treintena de encapuchados disparó contra este y ponchó los neumáticos con navajas. En ese camión había entre 15 y 20 normalistas.*  
.....

# "SIN NOVEDAD"

Félix Santana/  
Francisco Cruz/  
Miguel Alvarado

**E**velia Bahena, la mujer que paró cuatro años a la mina Media Luna, cuenta otra historia sobre Julio César. Dice que un líder como él no podía abandonar a nadie y que debió correr para poner a salvo a sus compañeros. Lo conocía porque habían coincidido en reuniones del Movimiento Popular Guerrerense (MPG). Él hizo lo que pudo y la suerte le alcanzó para regalársela a su normal de Ayotzinapa y a sus compañeros, pero no le quedó nada para él. Antes de poder escapar fue capturado.

Esa noche, mientras platicaba con Marisa a las 20:30 en el teléfono, Julio César vislumbró un México que no estaba en Iguala ni en ninguna trampa contrainsurgente, tampoco en otro lado porque no existe. Lo había expresado con la fuerza de la esperanza que después los años quitan: "Ayer me nació la preocupación por [el] futuro de nuestra bebé y así me vine a entregar todo, con tal de saber que nuestra bebé mañana va a estar bien. Tendremos amor, felicidad y recurso para salir a pasear".

Marisa Mendoza intentaría comunicarse con él una vez más y le envió cuatro mensajes entre las 23:59 y las 12 de la noche, que ya no tuvieron respuesta.

—Mi.amor.por favor.en.cuanto veas ewte msj avisame de que estas bien. Me dejaste muy preocupada. Por favor no olvidea avi-

sarme cualquier cosa. Te amoo y no quiero perderte flquwito.hemoso. Un poco después intentaría el último contacto, a las 00:29 del 27 de septiembre.

—Te amo.mi amor.

A esa hora, cuando el último "te amo" de Marisa era enviado, Julio César enfrentaba su destino convertido en mártir torturado, símbolo silencioso de Ayotzinapa.

El celular de Julio César, el LG L9, desapareció, robado por alguien.

Pero la actividad de ese teléfono apenas comenzaba.

"¡Ándale, dispara, mata a otro como ya mastaste a uno!"

Los estudiantes se dispersaron por Iguala en grupos pequeños, aunque otros se las arreglaron para esconderse de los municipales. En total, 68 alumnos estaban "perdidos en la ciudad" y esa era la causa de que agentes ministeriales y de la Secretaría de Seguridad los rastrearán desde las tres de la mañana, en un operativo conjunto. Fue por fin que gracias a llamadas lograron ubicarlos, después de más de tres horas de búsqueda.

Asustados de muerte, los normalistas se habían ocultado para evitar la cacería. El grupo

policíaco estatal, 42 agentes y 7 unidades, reunió a los 30 primeros a las seis de la mañana en las instalaciones de la Fiscalía Regional Zona Norte, donde dieron nombres y rindieron testimonio, pero también levantaron una denuncia contra los municipales, según reporte de la ministerial relacionado con el acta administrativa HID/SC/AA/03/0689/2014 oficio 7461 del 27 de septiembre de 2014.

A las tres de la mañana encontraron a los primeros siete alumnos en una azotea de Periférico Norte, a unos 200 metros del lugar de los hechos. A las 3:40 un segundo grupo de diez fue hallado entre las calles de Mendoza y Periférico Norte, junto a un auto Jetta rojo sin placas, acribillado. Una hora después, ocho más fueron recogidos en el domicilio de un profesor, Rafael Quesada. A las 5:30, otros cinco que deambulaban por el centro comercial Sam's Club, en Periférico Sur, fueron localizados. Los 38 restantes fueron hallados luego.

La tragedia de los estudiantes que se adentraron en Iguala es la más explorada desde entonces, pero todavía faltaban dos camiones, los que habían tomado rumbo al sur, hacia la carretera de Chilpancingo. Testigos que esperaban atención médica en el Hospital de Nuestra Señora de la Piedad, a dos minutos de la sede del 27 Batallón de Infantería, se asomaron a la calle cuando oyeron que algo pasaba. Vieron a jóvenes correr en la semioscuridad de la carretera federal Iguala-

la-Chilpancingo. Iban con piedras y se dirigían al entronque donde comienza Periférico Sur.

—Algo está pasando —dijo uno de los pacientes de la clínica a su esposa, antes de salir en su auto para dirigirse a casa, justo en la misma dirección, que los ubicó como testigos involuntarios del otro drama.

Pronto se encontraron con el tráfico casi detenido, avanzando a vuelta de rueda. Al llegar al cruce entre Periférico Sur y Altamirano, los autos estaban prácticamente parados porque allí, de un lado, estaban los estudiantes y un camión, y del otro, policías armados, apuntándoles.

“Más o menos eran 15 o 20 normalistas. Le decía a mi esposa que le apurara, que nos pasáramos rápido pero no podíamos, así que tuvimos que ir despacito, con los vidrios arriba y viendo lo que pasaba”, dijo ella, quien oyó los gritos que pintaban el cuadro entero, en ese otro Periférico igualteco.

—¡Ándale, dispara, mata a otro como ya mataste a uno! —gritó un joven prácticamente al lado de su auto, dirigiéndose a los policías, quienes le apuntaron de inmediato.

La familia logró salir y encerrarse en su casa el resto de la noche.

Un agente de inteligencia militar dijo a la PGR que antes de las 22:00 había

sido detenido el Estrella de Oro 1531 por dos patrullas municipales, la 028 y la 024, frente al Palacio de Justicia. Al final se identificarían hasta seis patrullas participantes en esa agresión. Todos los jóvenes que viajaban en la unidad fueron desaparecidos. Según el chofer del autobús, una treintena de encapuchados disparó contra este y ponchó los neumáticos con navajas. En ese camión había entre 15 y 20 normalistas.

Un policía municipal de Iguala, Alejandro Andrade de la Cruz, estuvo en la detención del 1531. Se colocó detrás del camión, atravesando su patrulla, e identificó en el lugar al comandante Hidalgo y a Álvaro Ramírez Vázquez, así como a dos patrullas de la Federal de Caminos y una de la Ministerial. Los municipales rompieron las ventanas con ramas y piedras, intentaron abrir la puerta por la fuerza, pero enfrentaron resistencia de los normalistas, por lo que lanzaron gas lacrimógeno.

A los ocupantes, ya sometidos, les rociaron gas pimienta pese a que la municipal no tiene registrado ese tipo de recursos antidisturbios. De eso da fe en declaración ante la PGR un agente militar que aseguró haber tomado cinco fotos de la detención de los estudiantes, a las 23:35. El chofer fue subido a una patrulla y desde ahí vio los disparos de los policías a los jóvenes dentro del autobús, la brutal golpiza a palos en la cabeza. Como no cabían en las patrullas, llamaron a municipales de Huitzoco, que ayudaron en el traslado con tres patrullas hacia

rumbo desconocido.

El chofer fue trasladado en una camioneta de la policía a un domicilio en el centro de Iguala, donde un hombre de unos 40 años ordenó dejarlo en libertad, mientras giraba instrucciones para el desarrollo del operativo. De acuerdo con el informe del GIEI, se comprobó la existencia de videocámaras afuera del Palacio de Justicia, que estaban en poder de la presidencia del Tribunal y no formaron parte de la investigación de la PGR porque desaparecieron o fueron destruidas.

A pesar de eso hubo videos que a las 23:39 captaron imágenes de tres patrullas de la policía de Iguala trasladando a personas por la salida a Taxco. Después, a las 23:21 fueron captadas dos patrullas con número oficial 303 y 306 de Cocula recorriendo el Periférico a alta velocidad, con cinco personas en cuclillas encañonadas por supuestos policías cada una, presuntamente después de atacar al autobús 1531. La patrulla 305 se quedó haciendo guardia en el lugar de la agresión.

Al día siguiente, pasado el mediodía del 27 de septiembre, todos los policías municipales de Iguala estaban acuartelados y desarmados al mismo tiempo que, según la “verdad histórica” de la PGR, en el basurero de Cocula se terminaban de quemar 43 cuerpos. “Sin novedad”, dijeron los partes de la comandancia de ese municipio para esos dos días. **NT**



Crédito/ Semanario Nuestro Tiempo.

# Guerra en Toluca

*\* Ese año, La Familia tomó otra decisión: eliminar a algunos jefes de las policías mexiquenses relacionados con Los Zetas y que se habían dedicado a reventar las tiendas de droga de la Plaza Toluca, que capos michoacanos habían comprado en una extraña negociación por varios millones de pesos a la delegación de la PGR.*

Francisco Cruz

“A principios de marzo de este año dos mil ocho”, recordó, “al encontrarme trabajando como chofer de taxi conocí a un sujeto que después supe respondía al apodo de Lobo, que me solicitó un servicio en la colonia Nueva Oxtotitlán, para trasladarlo al centro de la ciudad.”

Y en el trayecto hicieron plática, una de esas charlas informales entre pasajero y conductor. Pero no hablaron del clima, de política ni del tráfico que ya ahoga a la zona centro toluqueña. “Me preguntó acerca de la situación del taxi; si lo que ganaba me alcanzaba para vivir.”

El “no” contundente que respondió Reyes Sánchez animó a su interlocutor, quien lo invitó a trabajar. Sólo le dijo que se dedicaba a distribuir droga. En ese momento nada se habló de La Familia Michoacana. Eso vino después, poco a poco, hasta que el taxista se ganó la confianza. Primero serviría como informante. Y la labor consistía en reportar cualquier tipo de movilización policiaca o retén, “para que sus muchachos no pasaran por dichos lugares con su mercancía”.

En ese momento se enganchó de nueva cuenta. Aceptó trabajar para Lobo. Y nunca nada de nombres. Había una justificación: “Nadie era conocido por nombre, sino por apodo”. Así terminó el encuentro de esa tarde en el centro de

la capital mexiquense. La propina de cien pesos que recibió el taxista sirvió como esperanza de un mundo mejor.

La suerte estaba por cambiarle. Se acabarían las penurias desde que desertó de la Zona Militar de Colima. Ahora descifraría mensajes para los narcotraficantes. A las diez de la mañana del día siguiente sellaron su naciente relación laboral. Sostuvieron un encuentro por el rumbo de las facultades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), que se encuentran en el cerro de Coatepec. Se entrevistaron en la esquina del paseo Vicente Guerrero y la avenida Universidad. Y “en esa ocasión me hizo entrega de un teléfono celular nuevo, con el cual estaríamos en contacto”.

Esa mañana, el taxista aprendió sus primeras claves y las únicas que manejaría durante semanas: tope, cuyo significado derivaba en retén u operativo de la policía en algunas calles de Toluca. Y chiclero, por informante.

“Mi paga sería la cantidad de mil quinientos pesos a la semana, y mi semana comenzaba a correr a partir de ese día. Los días de paga serían los sábados”. Los encuentros que sostendrían serían siempre en el mismo lugar: el kiosco de la colonia Casa Blanca en Metepec. En los días siguientes, Fernando Reyes Sánchez se enteraría de que era integrante de una



Crédito: Miguel Alvarado.

organización delictiva conocida como La Familia Michoacana en la Plaza Toluca.

Y esa plaza “comprende los municipios de Toluca, Xonacatlán, Temoaya, Santiago Tianguistenco, San Mateo Atenco, Ocuilan, Capúlhuac, Huixquilucan, Mexicaltzingo y toda la zona conurbada —incluidos Metepec, base éste para tender una amplia red de casas de seguridad, Almoloya de Juárez, Calimaya, Tenango del Valle, Lerma, San Antonio La Isla, Tenancingo y Santa María Rayón—, cuya actividad es la venta, distribución y pago de peaje de droga, así como de piratería en general, como es la venta de discos, ropa y calzado”.

“Por mi buen desempeño llegué a ser jefe de informantes. Era el contacto entre mis superiores y los chicleros, todos ellos a bordo de vehículos proporcionados por la organización. Y, por precaución, todos robados.” De esa forma, si hay necesidad de abandonar algún vehículo, se puede hacer sin riesgo alguno. Se evita que las autoridades puedan rastrear al comprador o propietario de la unidad. Igual de importante es que así se evitan pérdidas económicas.

Ese año, La Familia tomó otra decisión: eliminar a algunos jefes de las policías mexiquenses relacionados con Los Zetas y que se habían dedicado a reventar las tiendas de droga de la Plaza Toluca, que capos michoacanos habían comprado en una extraña negociación por varios millones de pesos a la delegación de la PGR.

El primer objetivo fue un policía pariente del gobernador Enrique Peña Nieto: el comandante Cuitláhuac Ortiz Lugo, en ese momento alto funcionario de la PGJEM, a quien incluso se había involucrado en el robo de un cargamento de precursores para producir drogas sintéticas, armas y tres millones de dólares de la casa de seguridad de un cártel que operaba en la zona residencial de Ciudad Satélite, Naucalpan, aunque nunca hubo ninguna investigación oficial. El tema terminó por enterrarse y se acabó de tajo cuando Ortiz Lugo murió en un muy extraño accidente automovilístico en las primeras horas de la mañana —como se relató en capítulos anteriores—, saliendo de su residencia en el municipio de Atlacomulco.

Desde septiembre de 2008, la revista Proceso había investigado: “Reportes de inteligencia consultados indican que cuando el gobernador Peña Nieto habilitó a Cuitláhuac Ortiz, su sobrino político, como director de la policía ministerial, en poco tiempo este funcionario comenzó a controlar los puntos de venta de droga. [...] Las investigaciones de la PGR establecen que Ortiz, actualmente en funciones, operaba al amparo o en complicidad con José Manzur Ocaña, quien hasta el 6 de julio pasado era delegado de la PGR [...] y es ahijado de Humberto Benítez Treviño”.

Sin embargo, La Familia modificó sus planes porque, por tratarse de un personaje cercano a Peña —se enteraron de que era familiar directo—, la seguridad de Ortiz Lugo exigía planear un atentado sobre otras bases y llevaría

más tiempo. Así, los michoacanos decidieron eliminar al guardaespaldas del comandante Ortiz Lugo, el policía ministerial Braulio Nicolás Hernández Zúñiga.

Por llamarle de alguna forma, fue esa la presentación más espectacular de La Familia Michoacana en el valle de Toluca. Así estaba dispuesta a intimidar para que nadie metiera una tacha ni un gramo de droga ni un disco pirata en el territorio comprado. La responsabilidad de planear, ejecutar el atentado y asesinar a Hernández Zúñiga se dejó en las manos del Comandante Enero, un aspirante a capo grande, identificado más adelante por el nombre de René Calderón López.

Ex policía él mismo a quien gustaba rodearse de otros agentes ministeriales estatales para que le sirvieran como muro o escoltas, Calderón López era responsable de la Plaza Toluca para el control de la piratería en todas sus áreas: discográfica, audiovisual, ropa y calzado, así como del cobro de cuotas de piso y seguridad (extorsión en su más amplio significado) a propietarios de bares, cantinas, centros nocturnos, giros negros y palenques.

Fue obrero hasta 1991, cuando se cansó y optó por dedicarse al comercio. Según sus declaraciones ministeriales, vendió de todo, hasta que a principios de 2008 cambió de oficio y se hizo taxista, “actividad de la cual se derivó mi ingreso a La Familia Michoacana”. Y lo hizo apenas empezado el mes de marzo de este último año a través de Lobo, uno de los operadores de la organización en Toluca. **NT**

# La modernización del TLCAN y la guerra civil en México

*\* El empobrecimiento generalizado de la población en las últimas dos décadas ha ido acompañado de una mayor intervención militar de los EE.UU. en México, utilizando el argumento del crecimiento del narcotráfico pero que en realidad apunta a contener la insurgencia popular detonada por el deterioro de sus condiciones de vida y coordinar el bloqueo de la migración proveniente de Centroamérica y el Caribe.*

Rafael de la Garza Talavera  
Rebelión

**D**e cara a la urgente modernización de la dependencia económica mexicana para con la economía estadounidense -toda vez que las posibilidades del triunfo de Morena en el 2018 van viento en popa gracias a sus alianzas con sectores de la oligarquía descontentos con el gobierno de Enrique Peña- la discusión no radica en las eventuales ventajas o desventajas económicas para los habitantes de México sino en las posibilidades de que la militarización y la consecuente guerra civil que vivimos se profundice.

Tres factores incidirían en agudización de la crisis humanitaria: el aumento de la pobreza y la desigualdad como consecuencia de un crecimiento de la depredación de los recursos naturales y el consecuente desplazamiento de la población asentada en los territorios en disputa; el incremento de la intervención militar del Pentágono para mantener, principalmente, las inversiones extranjeras protegidas de la insurgencia popular; y claro, el fortaleci-

miento del narcoestado para mantener el modelo político cuya principal misión en mantener el status quo a como dé lugar.

No se mencionarán aquí las incontables cifras que demuestran que el éxito del TLCAN ha sido sólo para las grandes transnacionales y sus testaferros mexicanos. Baste decir que en los últimos 23 años la economía mexicana, de acuerdo con el informe del Centro para la Investigación Política y Económica (CEPR, en inglés) ha crecido a un ritmo menor que el resto de los países latinoamericanos. En el informe, titulado "Did NAFTA help México?" el CEPR afirma que México se encuentra en el lugar 15 de 20 países latinoamericanos en el crecimiento del PIB per cápita, entre 1994 y 2016, lo que ilustra en números el desastre en el nivel de vida de millones de mexicanos, provocado en gran parte por el TLCAN. La tasa de pobreza es de 55.1%, más alta que en 1994, por lo que más de 20 millones de mexicanos se ha desplazado por debajo de la línea de pobreza en ese periodo. El impacto

se ha concentrado sobre todo en la población rural: entre 1991 y 2007 casi cinco millones de personas fueron desalojadas de sus tierras, lo que sin duda está relacionado con el crecimiento de residentes mexicanos en los EE.UU.: de 4.5 millones en 1990 a 12.6 millones en 2009.

El empobrecimiento generalizado de la población en las últimas dos décadas ha ido acompañado de una mayor intervención militar de los EE.UU. en México, utilizando el argumento del crecimiento del narcotráfico pero que en realidad apunta a contener la insurgencia popular detonada por el deterioro de sus condiciones de vida y coordinar el bloqueo de la migración proveniente de Centroamérica y el Caribe. El pasado 15 y 16 de junio se celebró en Miami la Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica convocada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación del gobierno mexicano y el Departamento de Estado y la Secretaría de Seguridad Interna del gobierno

de estadounidense. Un par de meses antes, en abril, "... el jefe del Estado Mayor de la Defensa de Guatemala, Juan Manuel Pérez, anunció acuerdos entre los representantes de los países de la región y los Comandos Norte y Sur de los Estados Unidos de realizar patrullajes aéreos, terrestres y de reconocimiento en la frontera con México, intercambiar información e inteligencia, y "estandarizar protocolos y procedimientos para realizar operaciones de intervención con el apoyo de tecnología e inteligencia del Comando Sur". (<https://desinformemonos.org/mexico-anfiftrion-armar-plan-pentagono-migrantes-centroamericanos>).

La participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cámara de Comercio para organizar un día antes, el 14 de junio, una reunión con la participación de los sectores públicos y privados no deja lugar a dudas de lo que se pretende: asegurar la seguridad y el rendimiento de las inversiones, conteniendo la migración en la región gracias a la intervención militar dirigida desde el Pentágono con la colaboración subordinada del gobierno mexicano. Todo con la finalidad de complacer a Trump y, en el colmo de la simulación, lograr mejores condiciones para la modernización del TLCAN, como si la sumisión del gabinete de Peña fuera la garantía para evitar la catástrofe humanitaria en marcha.

Para el mantenimiento de la seguridad interna de México y sobre todo del estatus quo político y económico, el mantenimiento del narcoestado como dinámica estatal es pieza clave en la modernización del TLCAN en particular y de la estrategia política estadounidense en general. La militarización de los puertos mexicanos, el mando único y la militarización de las labores de seguridad pública a lo largo y ancho del país representan sin lugar a dudas el factor clave para comprender el crecimiento de la violencia y la inseguridad. Coordinada a partir del Plan Mérida, la militarización alimentada con un creciente gasto militar no sólo servirá a los intereses de la industria de armamento yanqui sino que además debilitará cada vez más el de por sí

magro gasto social. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI en inglés) el gasto militar mexicano se disparó en un 184% entre 2012 y 2016. Y si bien es cierto, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE) el gobierno de México invirtió entre 0.5% y 0.6% de su PIB -lo que lo coloca en el lugar 31 a nivel mundial- la compra de equipos de transporte como helicópteros, vehículos utilitarios Humvee y blindados de combate apunta a fortalecer labores de contrainsurgencia. El triángulo formado por las fuerzas armadas, el gobierno federal y los cárteles del narcotráfico se verá fortalecido por una mayor disposición de armamento que, apoyado con labores de inteligencia dirigida a espiar a la oposición (el caso Pegasus lo ha confirmado) alimentan la tendencia al mantenimiento de un modelo estatal que, más que atacar a los cárteles se apoya en ellos con la mediación de las fuerzas armadas y el Pentágono para mantener vigente el modelo económico y el grupo político que garantice el alineamiento de México con la estrategia geopolítica de los EE. UU.

Por todo lo anterior, la modernización del TLCAN estará guiada por la necesidad de armonizarlo tanto con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) como con el Plan Mérida. No responderá evidentemente a proteger los intereses económicos que favorezcan el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos sino a garantizar su sometimiento a los intereses geopolíticos de los EE. UU. El costo humanitario será entonces un daño colateral que no se detendrá sino que incrementará y seguirá siendo administrado con la bota militar nacional y extranjera. **INT**

\* Blog del autor: <https://lavoznet.blogspot.mx/2017/07/la-modernizacion-del-tlcan-y-la-guerra.html>

\* *Rebelión* ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

# La Hora Cero, Santos y la Estrella Polar

*\* Washington se ha quitado la careta. Y en el marco de una guerra de espectro completo diseñada por el Pentágono para conseguir un “cambio de régimen” en Venezuela, la llamada Hora 0 parece indicar que en los próximos días las acciones militares encubiertas podrían dar un salto en calidad. O al menos esa es la apuesta del sector militarista que controla el verdadero poder en las sombras en la Casa Blanca.*



Tras la reciente decisión de Donald Trump de imponer sanciones económico-financieras a Venezuela si el gobierno constitucional de Nicolás Maduro lleva a cabo la elección de constituyentes del domingo 30 de julio, Estados Unidos ha asumido de manera pública su responsabilidad directa en la ofensiva para derrocarlo.

Washington se ha quitado la careta. Y en el marco de una guerra de espectro completo diseñada por el Pentágono para conseguir un “cambio de régimen” en Venezuela, la llamada Hora 0 parece indicar que en los próximos días las acciones militares encubiertas podrían dar un salto en calidad. O al menos esa es la apuesta del sector militarista que controla el verdadero poder en las sombras en la Casa Blanca.

En ese contexto, no pueden pasar desapercibidas las revelaciones del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo, en el sentido de que “trabaja” junto con Colombia y México para derrocar a Maduro.

El 20 de julio, durante un foro sobre seguri-

dad en el Instituto Aspen de Colorado, Estados Unidos, con la tradicional retórica imperial Pompeo aseguró que en sendos viajes a Bogotá y Ciudad de México a comienzos de este mes, les hizo “entender” a los gobernantes de turno de ambos países “qué cosas podrían hacer” para ayudar a Estados Unidos a quitar a Maduro.

Desde la época de la administración Bush Jr. y su “cruzada” contra el terrorismo post-11/S, los regímenes derechistas de Colombia y México han sido los principales aliados regionales de la diplomacia de guerra de Washington.

Cultores de la política de “Seguridad Democrática” que ha ensangrentado a ambos países en el marco de sendas guerras irregulares o no convencionales de factura estadounidense, sus gobernantes, incluidos los actuales presidentes Juan Manuel Santos y Enrique Peña Nieto, han jugado el papel de comparas en la aplicación de las directrices emanadas de los círculos de poder en Washington.

Incluso antes, tras el lanzamiento del Plan Colombia por la administración Clinton en 1999/2000, el país sudamericano se convirtió en el portaviones terrestre del Comando Sur

para la guerra encubierta de los sucesivos inquilinos de la Casa Blanca contra la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Por su posición geopolítica y su red de radares y bases militares, y en su condición de país vecino con una larga frontera común –sobre todo con el estado venezolano de Táchira–, Colombia opera hoy como una base de operaciones de la ultraderecha neofascista que se ha apoderado de la conducción de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), según el plan diseñado por el Pentágono para derrocar a Maduro.

Pero además, con el consentimiento del presidente Santos, grupos paramilitares locales –que fueron un factor clave en la estrategia de contrainsurgencia y en la formación de un Estado terrorista de nuevo tipo durante los regímenes de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe– brindan hoy en territorio colombiano entrenamiento y asesoría a opositores venezolanos en prácticas avanzadas de la guerra irregular o híbrida.

Ello explica el empleo de acciones armadas y prácticas incendiarias kukulkaneras de corte terrorista/paramilitar, en la ofensiva

caótica desestabilizadora de estos “aprendices tropicales de Isis”, como les llama Luis Hernández, que lleva más de 100 días de duración en varias ciudades de Venezuela, con la irrupción de una forma de violencia cualitativamente diferente a la utilizada en las protestas de 2014 en Caracas, durante las denominadas guarimbas.

Precisamente en Táchira y su capital San Cristóbal se han venido registrando una serie de disturbios, sabotajes, ataques y hechos violentos, ejecutados por células con formación paramilitar o propia de una guerrilla urbana. Tales acciones sin precedente llevaron al ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, a afirmar que “la idea es convertir a Venezuela en otra Siria y a Táchira en un Alepo”.

En ese marco, y pese al apoyo brindado por los presidentes Chávez y Maduro al proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) —que con mediación de Fidel y Raúl Castro se desarrollaron en La Habana, Cuba y culminaron con el desarme de la insurgencia—, el Premio Nobel Juan Manuel Santos se ha convertido en un facilitador de las campañas de propaganda de la ultraderecha venezolana violenta contra el proceso bolivariano y el gobierno legítimo del presidente Maduro.

Asimismo, en una clara actitud intervencionista —que sigue el guión de la Operación Venezuela Freedom-2 diseñada por el Pentágono—, Santos ha manifestado su disposición para que Colombia juegue un papel clave en eventuales planes de “asistencia humanitaria”, que podrían derivarse de una acentuación, en los próximos días, de la actual política de “cerco y asfixia” contra Venezuela instrumentada por la CIA y el jefe del Comando Sur, almirante Kurt Tidd.

Fue como parte de ese mismo esquema injerencista bajo una falsa cobertura “humanitaria” (el mismo que aplicaron Washington y sus aliados de la OTAN en la ex Yugoslavia, Libia, Siria y Ucrania), que a finales de marzo pasado visitó Bogotá el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, y pidió a los colombianos “ayuda” para su país, en forma de envíos de alimentos, medicinas y productos básicos. No hacía más que reforzar la matriz de la “hambruna”, para justificar la intervención militar del Pentágono en su propio país.

Capriles, quien al igual que la dirigencia neofascista de la MUD cuenta con el total apoyo de Juan Manuel Santos, es asesora-

do políticamente por el colombiano Germán Medina, experto en la aplicación de estrategias de publicidad, marketing y propaganda negra, uno de los elementos esenciales de la guerra psicológica practicada de manera encubierta por el Ejército estadounidense en Venezuela.

Medina, principal accionista de la firma “Medina y Asociados” que ha colaborado con políticos como Álvaro Uribe, Noemí Sanín, Ernesto Samper, César Gaviria y Óscar Iván Zuluaga, ya había brindado asesoría a Capriles durante la campaña presidencial de 2013, cuando el candidato de la MUD fue derrotado por Nicolás Maduro.

A su vez, y como parte de la guerra política y de intoxicación mediática contra Venezuela, la reciente participación de Andrés Pastrana en el simulacro diversionista de la MUD del domingo 16 de julio —junto con los ex presidentes de México (Vicente Fox), Bolivia (Jorge Quiroga) y Costa Rica (Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez), todos prontuariados en sus países por corruptos— formó parte de las acciones del Pentágono en el área internacional, con la OEA como mascarón de proa, preparatorias de la llamada Hora 0 que augura una nueva oleada de violencia caótica los próximos días.

No hay duda que como antes Pastrana y Uribe, el presidente Juan Manuel Santos parece decidido a jugar un papel de peón al servicio de Washington. En la coyuntura busca asegurar su futuro, plegándose sin vacilar a los planes intervencionistas de la administración Trump en Venezuela.

La tradición se impone. Y todo indica que Santos mantendrá vigente la doctrina diplomática colombiana inaugurada por el presidente Marco Fidel Suárez en 1920, aquella que convirtió a Colombia en un país “objeto” al servicio de las posiciones hegemónicas de Estados Unidos en su “patio trasero”. Una diplomacia dependiente del panamericanismo de Washington, anclada en lo que simbólicamente se denominó como Réspice Polumn —mirar hacia la “Estrella Polar”—, que para la elite oligárquica colombiana ha sido siempre Estados Unidos.

Como antes Pastrana y Uribe, Juan Manuel Santos parece haber optado por un camino sin retorno, ése en el que refrendará su condición de vasallo del poder imperial. **NT**

*\* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.*

# Por aplicar la ley

\* Enfrente del “hombre serio, experimentado y probo”, como lo definió Eruviel Ávila Villegas ante integrantes de su gabinete en febrero pasado, tenía a Evangelina Lara Alcántara, profesora de carrera y hasta el 4 de julio presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México (TECA), quien con calma minimizó al funcionario y se limitó a decirle que “sólo llámeme Señora Presidenta, no es necesario ni interesa que usted sepa mi nombre”.

Luis Zamora Calzada

- ¿Y usted cómo se llama? No recuerdo su nombre, presidenta, o mejor dicho no sé -preguntó con aire de gran señor y una manifiesta actitud de prepotencia y menosprecio Francisco Osorno Soberón, actual secretario del Trabajo del gobierno por concluir en el Estado de México, de quien se dice es ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, ex presidente municipal de Chalco (2013-2015), ex diputado local (2009-2012), y fungió como director general de la Protectora de Bosques (Probosque) hasta el 10 de febrero del presente año y a partir del 13 del mismo mes es titular de ST, en sustitución de Alejandra del Moral Vela. Es el quinto personaje en ocupar el sexto piso de esa dependencia, quizá por ello no se sabe los nombres de los colaboradores.

Enfrente del “hombre serio, experimentado y probo”, como lo definió Eruviel Ávila Villegas ante integrantes de su gabinete en febrero pasado, tenía a Evangelina Lara Alcántara, profesora de carrera y hasta el 4 de julio presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México (TECA), quien con calma minimizó al funcionario y se limitó a decirle que “sólo llámeme Señora Presidenta, no es necesario ni interesa que usted sepa mi nombre”.

El rispido encuentro ocurrió días antes de dejar el TECA, fecha en que Francisco le requirió su renuncia a la maestra, manifestando que acataba las instrucciones de sus superiores, aunque de acuerdo al organigrama estatal se deduce que la instrucción salió de la Secretaría General de Gobierno estatal.

La salida de la maestra se da en un entorno político donde la corrupción y la impunidad se han convertido en los grandes males inherentes a políticos y funcionarios, provocando “el malhumor” de los mexiquenses y los mexicanos; el desacato y violación a la ley por los titulares de las instancias gubernativas ha llevado al descrédito a esa clase política, con actuaciones cada vez más cuestionables.

En este contexto, la presidenta del TECA (instancia impartidora de justicia laboral), venciendo inercias, en su pretensión por cumplir con lo que le establecía la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, aplicó las medidas de premio —sanciones a las autoridades que se niegan a reinstalar o pagar a los trabajadores despedidos sin razón legal alguna—, ordenadas en la ley laboral local para el cumplimiento de los laudos —sentencias laborales a favor del trabajador—, dictados en los expedientes laborales resueltos en el Tribunal, como consta en expedientes diversos y a manera de ejemplo las sanciones económicas impuestas a la ex titular de la Secretaría de Educación, Ana Lilia

Herrera, quien regresó a sus funciones legislativas.

Todo parecía encaminado a una probable transformación lógica, jurídica, en la ejecución de laudos hasta que la presidenta saliente firmó, en su carácter de titular del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje una suspensión temporal para el presidente municipal de Ecatepec, Indalecio Ríos Velázquez, por no cumplir de manera reiterada un laudo dictado a favor de una trabajadora del municipio, instaurada desde 2008 en contra del Ayuntamiento que gobernó el actual gobernador saliente.

Lo anterior consta en el expediente número SAE/385/2008 en cumplimiento del mandato de un Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de no haber acatado la presidenta del TECA la sentencia federal, hubiera sido separada y sentenciada por desacato a una determinación judicial dictada por los magistrados federales, con todas las consecuencias que establece la Ley de Amparo para las autoridades o los patronos que no cumplen con las sentencias que se ejecutan.

La maestra Evangelina ha sido separada por cumplir la ley, lo que parece estar muy lejos de la comprensión de quien ordenó eso, a su vez la determinación de los hombres del sistema mandan un claro mensaje desde la administración de Eruviel Ávila, que por fortuna termina: adelante con no acatar la legalidad, seguir con la corrupción, la impunidad y que prevalezca la injusticia en contra de los trabajadores, pobre Estado de México en los dos meses que restan a este llamado gobierno constitucional.

## Un mal del sistema

Margarito tiene la vista puesta en el infinito, no se sabe qué intenta mirar. Su rostro refleja preocupación y con voz pausada dice: “son doce años los que llevo en esa escuela, parte de mi vida quedó en ese lugar, he cumplido con lo que me encomendaban y así como así me dijo el director que ya no tenía trabajo, sin explicación ni nada ordenó que sacara mis cosas, que ya no regresara el lunes”. Fue despedido el 30 de junio por la tarde de la preparatoria oficial 197 de Santiago Tlacotepec, en Toluca.

Otro hombre, Ambrosio, corrió con la misma suerte o mala suerte para el caso. Con una antigüedad de siete años en esa preparatoria, cumpliendo eficientemente con lo que le venían encomendando en su área, asegura. Ante el despido muestra reacciones propias de quien ha sufrido una injusticia desde un acto autoritario que parece dominar a los titulares de las instituciones públicas, sin importar el nivel, pues se creen con poder

para hacer y deshacer en su ámbito, no les importa a quién dañan, generalmente los afectados suelen ser los trabajadores que ellos consideran más indefensos. Él afirma al respecto:

- Nos dan a firmar un contrato semestral, nunca nos han entregado una copia, todo se queda con el director, la escuela nos paga únicamente 27, los tres restantes los cubre la Asociación de Padres de Familia, el sueldo que nos cubre la escuela lo deposita a una cuenta del banco, el resto lo han entregado en efectivo. La última quinceña fue el 27 de junio, sin imaginar lo que pasaría nos hicieron ir hasta el viernes 30, ese día nos corrió este maestro; no entiendo, nunca hemos hecho nada malo, ahora de qué va a comer mi familia”, pregunta.

Rocío es muy callada, ella fue responsable de la biblioteca escolar, siempre al pendiente de su buen funcionamiento, sin embargo eso no importó al director, también fue cesada injustificadamente. Con la misma preocupación reflejada en su rostro, al igual que sus compañeros, dice: “nosotros no tenemos seguro ni nada de esas cosas, nunca nos han ayudado y ahora esto. Nunca hemos estado en el sindicato, que no importa mucho, de todos modos nos tratan con la punta del pie”.

Los tres —en realidad son cuatro los afectados—, fueron despedidos el 30 de junio por el director de la escuela preparatoria 197, Jorge Antonio Arcos Rossano, quien por cierto cubre el interinato en esa función y con posibilidades de que le extiendan el término hasta por un año más, sin presentar ninguna evaluación para el ascenso. Eso no importa es esos casos, se asegura que es recomendado del sistema y puede actuar contra los más vulnerables.

En efecto, esa fecha despidió a tres trabajadores manuales y a la responsable de la biblioteca escolar —de palabra, aseguran—, no hubo documento de rescisión, fue una decisión personal, unilateral y autoritaria para perjudicar a la gente, sin pensar en el daño que está causando, colocando en riesgo la subsistencia de los trabajadores y sus familias, en donde por supuesto hay niños.

Él asegura que la medida fue autorizada por la supervisión escolar para intentar justificar la ausencia del personal que sufrió la agresión laboral del director, pero no existe ninguna constancia de su aseveración.

Esta muestra de injusticia suele darse en cualquier nivel de autoridad, no se hace pública, los afectados generalmente tienen demasiado miedo para denunciar, la



## UAEM se adecua a desafíos que derivan de la modernización de las Ciencias Jurídicas

\* Así lo aseveró el rector Alfredo Barrera Baca, durante la Ceremonia Conmemorativa al Día del Abogado, a la que en representación del gobernador de la entidad, Eruviel Ávila Villegas, asistió la Consejera Jurídica del ejecutivo estatal, Luz María Zarza Delgado.

**T**oluca, México; 12 de julio de 2017. El reto actual para quienes ejercen el Derecho es recuperar el equilibrio entre el necesario respeto a los derechos humanos y el logro verdadero de la justicia, advirtió el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, durante la Ceremonia Conmemorativa al Día del Abogado, a la que en representación del gobernador de la entidad, Eruviel Ávila Villegas, asistió la Consejera Jurídica del ejecutivo estatal, Luz María Zarza Delgado.

En el Aula Magna "Lic. Adolfo López Mateos" y acompañado del secretario de Rectoría, Luis Raúl Ortiz Ramírez, y la Abogada General de la institución, Gabriela Fuentes Reyes, el rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense afirmó que en la actualidad, en el ámbito de la enseñanza del Derecho, esta casa de estudios se adecua a nuevos desafíos y requerimientos que derivan de la modernización de los tribunales y juzgados.

Luego de entregar un reconocimiento a la profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho, Martha Elba Izquierdo Muciño, por su sobresaliente trayectoria como docente e investigadora durante 35 años en la institución, Barrera Baca enfatizó la necesidad de reivindicar el racionalismo y humanismo, pero también consideró necesario recuperar el gusto por estudiar, pensar, trabajar y luchar

con lealtad y tolerancia por la igualdad jurídica.

Sostuvo que si se careciera de dichos valores no habría derechos humanos, progreso social o político; pasaríamos de la libertad a la licencia, de la rebelión a la indolencia y del relativismo a la barbarie.

En este contexto, Alfredo Barrera Baca llamó a hacer que la ley y la justicia coincidan con la verdad y agregó que hoy en día "el laberinto de la modernidad jurídica" representa un camino que demanda mucho y tenaz estudio, pues el Derecho se transforma constantemente. En esta ceremonia, a la que asistieron el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la entidad, Baruch Delgado Carbajal, y el ex rector de la UAEM e integrante del Consejo de la Judicatura, Marco Antonio Morales Gómez, la directora de la Facultad de Derecho, Inocenta Peña Ortiz, aseveró que los abogados son actores decisivos en el desarrollo y consolidación de la sociedad.

Sin embargo, concluyó Peña Ortiz, afrontan el reto de resignificar su papel en un entorno globalizado donde se hace patente la demanda de un profesional internacionalizado que asuma el desafío de la rehumanización de la profesión jurídica.

